

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (03) de octubre de dos mil veintidós (2022).

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO:	760012333000 <b>20220036000</b>
DEMANDANTE:	ÁNGELO GUTIERREZ RIVERA Y OTROS <a href="mailto:abogadoalexcoll@gmail.com">abogadoalexcoll@gmail.com</a> <a href="mailto:gutierrezangelo330@gmail.com">gutierrezangelo330@gmail.com</a> <a href="mailto:albarivera1524@gmail.com">albarivera1524@gmail.com</a> <a href="mailto:arleygutierrezrivera@gmail.com">arleygutierrezrivera@gmail.com</a> <a href="mailto:juanmarin2985@gmail.com">juanmarin2985@gmail.com</a> <a href="mailto:alexanderliu0325@gmail.com">alexanderliu0325@gmail.com</a> <a href="mailto:zulmapatricia3@gmail.com">zulmapatricia3@gmail.com</a> <a href="mailto:estherjuliarivera@gmail.com">estherjuliarivera@gmail.com</a> <a href="mailto:maylaurin40@gmail.com">maylaurin40@gmail.com</a> <a href="mailto:jorgerivas0375@gmail.com">jorgerivas0375@gmail.com</a>
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
ASUNTO:	DECLARA FALTA DE COMPETENCIA Y ORDENA REMISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Auto interlocutorio No. **147**

La demanda, objeto de análisis en esta providencia, fue presentada el 28 de febrero de 2022<sup>1</sup>.

En lo referente a la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021<sup>2</sup>, cuya entrada en vigencia de la modificación de competencias ocurrió a partir del 26 de enero de 2022<sup>3</sup>, establece:

**<<ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021>. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...)

<sup>1</sup> Índice 3 del expediente judicial electrónico del aplicativo SAMAI, archivo .zip, documento .pdf <<11ActaDeReparto>>  
<sup>2</sup> Disposición normativa que fue publicada en el Diario Oficial No. 51.568 el 25 de enero de 2021 (véase el siguiente enlace: <http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/view/diariooficial/consultarDiarios.xhtml?jsessionid=6d26da50554da34f5f3076050ab2>), fecha durante la cual se cumplió su promulgación conforme el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913) y la sentencia C-932 de 2006, lo que implica que entró en vigencia a partir del día siguiente, desde las 00:00 horas del **26 de enero de 2021**.  
<sup>3</sup> En armonía con el término fijado en el artículo 86 que establece la entrada en vigencia de las normas que modifican las competencias de los juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado respecto de demandas que se presenten un año después de publicada la ley.

5. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.>> (Subrayado de la Sala).

Para el efecto, el artículo 157 de la misma norma refiere que la cuantía se determinará por el valor de los perjuicios causados, según la estimación hecha por el actor de la demanda, sin que se considere los perjuicios inmateriales, salvo que sean los únicos que se reclamen.

También, en los incisos segundo y tercero de la referida disposición, que:

<<La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.>> (Subrayado de la Sala).

Concordante con lo anterior, el Consejo de Estado al abordar una tutela propuesta contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no repuso el auto que ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Bogotá, señaló en punto de la determinación de la competencia por el factor cuantía, su postura en cuanto a no considerar las pretensiones futuras o no consolidadas, en los siguientes términos<sup>4</sup>:

<<2.5.1.4. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal accionado atendió las reglas determinadas por la Sala Plena de la Sección Tercera[11] citadas en el auto de 13 de febrero de 2017, por cuanto no tuvo en cuenta, a efectos de determinar la cuantía, el lucro cesante futuro solicitado en la demanda de reparación directa, como pretende el actor. Ello, por cuanto dicha Sección ha considerado que no pueden tenerse en cuenta los perjuicios que se generen después de presentarse la demanda, de modo que la autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente.

2.5.1.5. Cabe resaltar que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado varió su postura, pues en el auto que dictó el 9 de diciembre de 2013 consideró que debían sumarse los perjuicios consolidado y futuro dado que hacen parte del lucro cesante. Sin embargo, en el auto de 25 de septiembre de 2017, es decir, después de la decisión de la Sala Plena de dicha Sección (17 de octubre de 2013), consideró que la cuantía se determina sin tenerse en cuenta los frutos, intereses o perjuicios causados con posterioridad a la fecha de la demanda. De modo que el criterio adoptado por dicha Subsección en el 2013 no podía servir de fundamento para la determinación de la cuantía y por ende, no podía el Tribunal aplicarlo al presente asunto>>. (Subrayado de la Sala).

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de tutela del 25 de octubre de 2018. Radicación No. 11001-03-15-000-2018-00792-00(AC).

Ese criterio interpretativo ha sido acogido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sede ordinaria en distintos autos dictados en procesos de reparación directa, entre otros, en los del 13 de febrero de 2017 y 17 de octubre de 2013<sup>5</sup> éste último referido en la anterior sentencia, que en lo pertinente se transcribe:

<<Fijado la anterior tesis [la de desechar el cómputo de los perjuicios inmateriales], la Sala recuerda las demás reglas fijadas por el artículo 157 del CPACA para fijar la cuantía, siendo estas **ii)** ante la acumulación de pretensiones la cuantía se determina a partir de la mayor pretensión de todas aquellas y **iii)** se tendrá en cuenta el valor de las pretensiones al tiempo de presentación de la demanda, descartando la cuantificación de los pedimentos que se generarán con posterioridad a la presentación de esta, o los frutos o intereses que se soliciten<sup>6</sup>. Así las cosas, en adelante se tornará innecesario acudir al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil o a norma similar del procedimiento civil, a efectos de determinar la cuantía de un asunto, dado que ya se cuenta con unas reglas expresas que se ocupan en su integridad de dicho tema dentro del procedimiento contencioso administrativo.>>

Aunque esa decisión es previa a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el criterio interpretativo sigue vigente a la fecha, habida cuenta que la norma modificatoria igualmente precisa, en similares términos, que los perjuicios a considerar para determinar la cuantía, incluso los accesorios, son los **causados hasta la presentación de la demanda** y, los futuros dado su carácter incierto, son anticipados por cuanto no se han originado.

En el presente caso, la parte demandante (integrada por 17 personas en total) pretende que se declare administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante presente y futuro) e inmateriales (daño moral y a la salud) causados a los demandantes con ocasión de las lesiones producidas a los señores Ángel Gutierrez Rivera y Emilsen Gamboa Rivas, como consecuencia del accidente de

<sup>5</sup> Véase, entre otras, los autos del 13 de febrero de 2017, Radicación No. 76001-23-33-000-2016-01705-01(58564) y, del 17 de octubre de 2013, Radicación No. 11001-03-26-000-2012-00078-00(45679), ambos del CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

<sup>6</sup> Artículo 157 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

**Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.**

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (negritas fuera del texto original).



tránsito sucedido el 13 de junio de 2020, entre la motocicleta de su propiedad y una camioneta de la entidad demandada.

La estimación razonada de la cuantía, que la estima en al más de mil ciento cuarenta millones de pesos (\$1.140.478.581), es resultado de sumar de los valores asociados a los perjuicios causados, sin tener en cuenta los de tipo inmaterial, acorde con el siguiente cuadro:

Concepto			Valor Total
Daño emergente			\$31.614.587
Lucro cesante	Presente/Consolidado	\$98.335.116	\$1.108.863.994
	Futuro/Anticipado	\$1.010.528.878	
Total			\$1.140.478.581

La anterior estimación fue detallada, en lo referente a sus conceptos y valores en el acápite de las pretensiones de la demanda, que se refieren a continuación:

- Para Ángel Gutierrez Rivera, por concepto de **perjuicios materiales**, la suma de \$859.848.691, integrados así: (i) en la modalidad de **daño emergente, la suma de \$31.614.587** que comprenden: servicios de ambulancia, medicamentos, asesoría jurídica y contable, gastos de transporte, asistencia y cuidados profesionales en salud, reparación motocicleta, consulta de seguimiento terapéutico psicológico familiar (08/2020-08/2021); (ii) en la modalidad de **lucro cesante consolidado, la suma de \$74.083.314**, que comprenden su salario y bonificaciones como empleado y sus ingresos como independiente; (iii) en la modalidad de **lucro cesante futuro o anticipado, la suma de \$754.150.790**, que comprende la indemnización futura de lo dejado de percibir producto de su salario e ingresos como independiente, según su expectativa de vida futura;
- Para Emilsen Gamboa Rivas, por concepto de **perjuicios materiales**, la suma de \$280.629.890, integrados así: (i) en la modalidad de **lucro cesante consolidado, la suma de \$24.251.802**, que comprende sus ingresos salariales dejados de percibir; (ii) en la modalidad de **lucro cesante futuro o anticipado, la suma de \$256.378.088**, que comprende la indemnización futura de lo dejado de percibir producto de su salario según su expectativa de vida.

Al unísono con la norma que rige la materia, habida consideración que existe una acumulación de pretensiones materiales, la de mayor monto individualmente considerada corresponde a lo solicitado por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado a favor del señor Ángel Gutiérrez Rivera, en un monto de *setenta y cuatro millones ochenta y tres mil trescientos catorce pesos* (\$74.083.314), equivalente a 74,08 SMLMV del año 2022, año de presentación de la demanda, a razón de \$1.000.000 el SMLMV de este año.



De manera que, forzoso es concluir que el conocimiento del asunto corresponde, en primera instancia, a los jueces administrativos del circuito judicial de Santiago de Cali, por no superar su cuantía los 1.000 SMLMV, conforme lo reglado en el artículo 155.6 del CPACA<sup>7</sup>, en armonía con la competencia territorial fijada en el artículo 156.6 de la misma norma, comoquiera que los hechos ocurrieron en la ciudad de Santiago de Cali.

Por lo expuesto, se,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: DECLARAR** la falta de competencia de esta Corporación por el factor de la cuantía, para conocer en primera instancia, el presente asunto.

**SEGUNDO: REMITIR** el expediente, por intermedio de la Secretaría de esta Corporación, a la Oficina de Reparto de los juzgados administrativos del Circuito de Cali, previa anotación en los Sistemas de Registro y trámites de compensación correspondientes.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

(firma electrónica)  
**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
**Magistrado**

VCN

<sup>7</sup> <<**ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...)

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.>>